

DOCUMENTO SOBRE
DONACIÓN DE OVOCITOS

DOCUMENT SOBRE
DONACIÓ D'OÒCITS

DOCUMENT ON
OOCYTE DONATION

OBSERVATORI DE BIOÈTICA I DRET

M. Casado y J. Egozcue (Coords.)



DOCUMENTO SOBRE DONACIÓN DE OVOCITOS

Elaborado por el Grupo de Opinión del
Observatori de Bioètica i Dret
Parc Científic de Barcelona

Barcelona, abril de 2001

OBSERVATORI DE BIOÈTICA I DRET

C/ Baldiri Reixac, 4-6
Torre D, 4t
08028 - Barcelona
Tel./Fax: 93 403 45 46
e-mail: obd@pcb.ub.es

<http://www.ub.es/fildt/bioetica.htm>

<http://www.bioeticayderecho.ub.es>

<http://www.bioeticayderecho.com>

Portada: Imatge cedida pel Servei de Medicina de la Reproducció del Departament d'Obstetrícia i Ginecologia de l'Institut Universitari Dexeus de Barcelona

Imprime: Signo Impressió Gràfica, s.a.
C. Múrcia, 54 d, Pol. Ind. Can Calderon
08830 Sant Boi de Llobregat - Barcelona

Depósito Legal B-17.978-2001

PRESENTACIÓN

El Grupo de Opinión del Observatori de Bioètica i Dret, con sede en el Parc Científic de Barcelona, surgió para tratar de dar respuesta a la necesidad de analizar científicamente y desde un punto de vista pluridisciplinar, las implicaciones éticas, sociales y jurídicas de las biotecnologías, y para proponer después actuaciones concretas.

La creación del Observatori de Bioètica i Dret se llevó a cabo con la intención de participar en el diálogo universidad/sociedad, y con la finalidad de hacer oír su voz en el conjunto de la sociedad y, más específicamente, ante los organismos públicos, administrativos o políticos que regulan y controlan las actividades de investigación y la aplicación de las nuevas tecnologías. Ello requiere también la voluntad de establecer relación con los medios de comunicación para mejorar la calidad de la información.

En esta ocasión el grupo ha analizado las cuestiones referentes a la donación de ovocitos, que requieren un debate social informado que permita establecer el suficiente consenso para que se pueda dar lugar a la correspondiente normativa jurídica, acorde con el sentir social.

En este tema, como suele suceder en Bioética, se requiere una especial disposición para el diálogo pluridisciplinar que englobe los planteamientos ético-filosóficos, los de la antropología, los jurídicos y los socio-sanitarios, y que cuente con una fuerte base técnica y científica, aportada por aquellas disciplinas cuyas nuevas posibilidades desencadenan el debate.

Por ello, el grupo ha sido coordinado por un médico especialista en reproducción humana, el Dr. Josep Egozcue, y una jurista, la Dra. María Casado, y ha contado con la aportación de los especialistas en andrología, ginecología, biología celular y embriología, medicina, filosofía, antropología y derecho que se relacionan en el anexo.

PREÁMBULO

Según datos de la Sociedad Española de Fertilidad un 15% de las parejas españolas, que se encuentran en edad reproductiva, sufren esterilidad. Y aproximadamente un 40% de esas parejas con problemas de fertilidad recurrirán a un tratamiento de reproducción asistida y en algunos casos requerirán la donación de ovocitos. Estas cifras aumentan cada año. Es obvio que en nuestra sociedad cada vez son más las mujeres que optan por retrasar la maternidad lo que hace más frecuentes los problemas de esterilidad.

Las técnicas de reproducción asistida permiten tener hijos biológicamente propios a personas que sin la ayuda de estos adelantos no habrían tenido descendencia. Los problemas derivados de estas técnicas han sido de los primeros temas relacionados con la Bioética y las nuevas tecnologías abordados y regulados por diferentes Estados.

En nuestro país existen normas jurídicas directamente aplicables: Ley 35/1988, de técnicas de reproducción asistida humana; Real Decreto 412/1996, por el que se establecen los protocolos obligatorios de estudio de los donantes y usuarios relacionados con las técnicas de reproducción humana asistida y se regula la creación y organización del registro nacional de gametos y preembriones con fines de reproducción humana; Real Decreto 413/1996 por el que se establecen los requisitos técnicos y funcionales precisos para la autorización y homologación de los centros y servicios sanitarios relacionados con las técnicas de reproducción humana asistida; Real decreto 415/1997, por el que se crea la Comisión Nacional de Reproducción Humana Asistida; Orden del Ministerio de Sanidad y Consumo de 25 de marzo de 1996 de normas de funcionamiento del Registro Nacional de Donantes de Gametos y preembriones y Ley 42/1988, de 28 de diciembre, de donación y utilización de embriones y fetos o de sus células, tejidos u órganos.

La Ley de Reproducción Asistida, pionera en su momento en Europa, hoy corre peligro de quedar obsoleta en algunos de sus aspectos si no se adecúa a los avances científicos producidos durante estos años. Por ello, entendiendo que esta regulación es, sin duda, un buen punto de partida este documento propugna la conveniencia de revisarla y completarla.

La opinión de la sociedad ante la reproducción asistida en la actualidad es de aceptación generalizada. Sin embargo en el trasfondo de estas técnicas existen concepciones morales y religiosas contrapuestas. Es interesante señalar que la religión católica se muestra en su doctrina contraria a ellas aunque en la práctica no hace hincapié en su prohibición –contrariamente a lo que sucede con otras cuestiones, como por ejemplo el aborto-. Otras religiones, son más favorables a la utilización de las técnicas de reproducción asistida.

Desde planteamientos radicalmente distintos, la consideración del respeto a los derechos de la mujer hace que algunos análisis feministas sean poco favorables a la aceptación de estas técnicas. La creencia de que en ciertos casos las mujeres están sometidas a presión, de que la información no es todo lo explícita que sería necesario en cuanto al carácter fuertemente invasivo de los procedimientos -de donación de ovocitos por ejemplo-, y la idea de que el consentimiento informado no es ni tan informado ni tan libre en determinados casos, lleva a plantearse si –tras las indudables ventajas- no existen puntos oscuros que deberían ser puestos de manifiesto y debatidos conjuntamente.

Es decir, las técnicas de reproducción asistida aunque tienen una buena aceptación social y una amplia cobertura normativa plantean, en ocasiones, problemas morales y jurídicos de importancia; como es el caso de la donación de ovocitos. Así, existe un importante debate sobre las normas, no sólo jurídicas sino también éticas y deontológicas que regulan los problemas relacionados con la selección de las donantes, el anonimato, la información que se les suministra, los criterios de selección, el control del tratamiento, la compensación que reciben o la necesidad de protegerlas durante el proceso de donación

Porque, aunque de la utilización de los óvulos de donantes se deriven bienes para las mujeres o las parejas que recurren a las técnicas de reproducción asistida, esto no dispensa de la obligación, entre otras cosas, de establecer criterios médicos claros y homogéneos de selección y de informar detalladamente a las donantes de los riesgos y responsabilidades que asumen con su acto altruista.

Tanto la Ética (que busca la felicidad de las personas, si no se trata de morales lastradas por componentes que no pertenecen al reino de los humanos) como el Derecho (que debe regular sobre los problemas reales que se plantean a la sociedad) deben ocuparse de estas cuestiones,

proponiendo pautas de conducta asumibles por la mayoría de los ciudadanos y respetuosas con las minorías que se materialicen en el respeto a los Derechos Humanos.

Este Documento pretende aportar información y puntos de vista distintos, tanto para participar en el debate público como para proporcionar pautas a la administración y al legislador con vistas a una posible modificación de la normativa existente en nuestro país, tratando de encontrar un consenso para las cuestiones concretas que tranquilice a los ciudadanos y, a la vez, haga funcionar el orden científico e industrial.

La sociedad en que vivimos es una sociedad plural, constituida por individuos y colectivos con intereses y sensibilidades diversos, potencialmente en conflicto, en la cual el ciudadano no constituye simplemente una pieza más en la suma de la voluntad común, y en la que precisamente la función de las estructuras estatales es conciliar los distintos planteamientos en el marco de los principios establecidos por la Constitución, instrumentando las soluciones a través de leyes parlamentarias.

Desde aquí preconizamos un planteamiento que busque pautas de conducta asumibles, tomando siempre como punto de partida los hechos demostrados científicamente, y como marco para el establecimiento de lo que es o no es aceptable el referente que proporcionan los Derechos Humanos. Se trata, pues, de seguir una vía de carácter cultural y social que se apoya en la construcción de los valores morales y culturales, y su plasmación en normas.

Y, precisamente, es ahí donde juega el derecho como medio de tratar los conflictos y como sistema para fijar los acuerdos. La sociedad política debe ser tolerante con aquellas opciones que no impliquen un sacrificio desorbitado para la comunidad. Se trata de establecer pautas de conducta, no de ahondar en la controversia entre planteamientos enfrentados. Conseguir un compromiso en estas circunstancias no es un fracaso, sino que lo más probable es que proporcione el mejor resultado, y el más ético, siempre que se reconozca la legitimidad de los distintos puntos de vista que se mantienen.

Creemos que las normativas que se establezcan en estos campos deben de estar imbuidas de la idea de provisionalidad, ya que el ritmo de los descubrimientos científicos y el de la reflexión y normativización son

necesariamente distintos. La distancia entre la valoración y la actuación real de la sociedad y las normas no debe ser tan grande que convierta a éstas en colecciones de buenos deseos. Es preciso que el consenso normativo se establezca a partir de los datos empíricos, y en el marco de lo establecido por los derechos reconocidos.

Toda decisión político-jurídica debe tener en cuenta que es una decisión que se toma en unas coordenadas espacio-tiempo concretas y finitas. Si se trata de una decisión que vincula con carácter general, debe ponderar el interés general sobre el particular, y si se trata, por el contrario, de una decisión que afecta a personas concretas, debe proteger y ponderar los intereses en juego de las partes implicadas. En todo caso, quien decide en derecho debe plantearse si su resolución afecta a derechos fundamentales y si puede entrar en pugna con otros derechos, como la salud, con los intereses de los afectados, o con principios y valores reconocidos. Además, conviene tomar en consideración el papel que pueden desarrollar los diversos órdenes normativos –no sólo los jurídicos, sino los deontológicos y de buena práctica profesional-, con sus correspondientes sanciones.

Este Grupo de Opinión del Observatori de Bioètica i Dret trata de partir, en sus propuestas, de la libertad, estableciendo luego las condiciones de su ejercicio y los límites, si es necesario. Y propugna que es posible establecer acuerdos respecto a lo que hay que hacer en determinadas circunstancias, aunque difiera en las razones para ello. Sólo considerando que, desde principios distintos, se puede convenir en las mismas pautas, concretas y revisables, se puede avanzar en el tratamiento y la resolución de los problemas bioéticos.

DECLARACIÓN

EXPOSICIÓN DE MOTIVOS

Considerando que la prevalencia de la esterilidad genera una demanda creciente de donaciones de ovocitos.

Considerando que las técnicas de reproducción asistida están socialmente aceptadas, han sido legalmente legitimadas y, además, forman parte de las prestaciones sanitarias otorgadas por el sistema sanitario público.

Considerando que en la donación de ovocitos se emplean técnicas que no están totalmente exentas de riesgos.

Considerando que, mientras no se cuestiona la compensación económica por la donación de semen, se ha planteado que la más elevada cuantía de la compensación por la donación de ovocitos puede chocar con el requisito de la gratuidad establecido por la ley.

Considerando que los problemas que generan las nuevas tecnologías reproductivas sólo pueden afrontarse en el contexto de la discusión plural entre especialistas de distintas disciplinas científicas y sociales y de un debate social profundo.

Considerando que es necesario contribuir al debate social a fin de elaborar propuestas que orienten la política legislativa del Estado.

Conscientes de que los criterios de actuación en Bioética deben ser revisados periódicamente, en función del desarrollo de la ciencia.

El Grupo de Opinión del Observatori de Bioètica i Dret ha llegado a las siguientes

CONCLUSIONES

1. La selección de la donante idónea debe conjugar los criterios médicos con el sentir social. Ello implica que el tema debe ser tratado con la necesaria flexibilidad sin acudir a decisiones dogmáticas apriorísticas.

Aun cuando pudiera considerarse más justo, según cierta opinión social, que los riesgos de la donación de ovocitos los asuman aquellas mujeres afectadas por problemas de esterilidad que se benefician de forma significativa de las técnicas de reproducción asistida, desde la perspectiva médica, las donantes idóneas son mujeres jóvenes –entre los 18 y los 35 años que marca la ley-, sanas, que actúan libremente; las mujeres sometidas a técnicas de reproducción asistida no deberían ser donantes.

2. La información que se ha de proporcionar a la potencial donante de ovocitos debe ser la máxima posible y se determinará a través de los protocolos de información escrita sobre el procedimiento y del documento de consentimiento informado.

La información debe abarcar la descripción del procedimiento de extracción de los ovocitos y detallar los riesgos presentes y futuros. Es fundamental promover los protocolos, consensuados por sociedades científicas y asociaciones de usuarios, con el fin de que exista una unificación de criterios.

3. Se debe regular el establecimiento de un seguro obligatorio de responsabilidad objetiva por parte del centro que cubra los riesgos de la donación de ovocitos.

Este tipo de seguro ya es preceptivo en procedimientos similares como el de la hemodonación. Ni la sanidad pública, ni los seguros privados de los médicos deben asumir los riesgos generados por la donación de gametos femeninos. Es preciso señalar que esta reparación no estaría cubierta por la compensación ya que ésta se barema en función de molestias, gastos y lucro cesante de las donadoras y no de los riesgos que asume.

4. La donación de ovocitos debe ser anónima.

Este requisito, sin embargo, puede ser dispensado por la ley en circunstancias excepcionales, que debería valorar un organismo competente.

5. Las campañas de promoción de la donación deben dirigirse a un público que pueda valorar correctamente los riesgos asumidos. La publicidad de los programas debe ser fundamentalmente informativa y no competitiva.

La publicidad debe hacerse de acuerdo a pautas comunes, siguiendo criterios establecidos por los códigos deontológicos y por las sociedades científicas implicadas.

6. La cuantía de la compensación debe seguir criterios homogéneos y estar fijada por la administración, a propuesta de las sociedades científicas implicadas y de los centros de reproducción asistida.

Teniendo en cuenta que la donante de ovocitos debe someterse a un tratamiento no exento de riesgos y que debe realizar numerosos desplazamientos al centro, se considera que debe existir una compensación que debe ser fijada por la administración -a partir de la propuesta de los centros receptores- siguiendo criterios homogéneos puesto que el mercado no debe ser el criterio regulador y que debe ser revisada periódicamente.

7. Conviene insistir en la necesidad de que funcione de manera efectiva el Registro Nacional de donantes de gametos que establece la ley.

Con la finalidad de preservar la identidad de las partes implicadas, los ficheros deberán establecerse de manera que la confidencialidad sea protegida de forma adecuada. Para evitar las donantes habituales es necesario consultar el registro de donantes de gametos antes de aceptar a las candidatas.

8. Independientemente de las dificultades técnicas que comporta, se recomienda fomentar la donación de ovocitos post-mortem y que el procedimiento de extracción de órganos contemple también la extracción de los ovarios, así como su mantenimiento de la forma científicamente más adecuada.

Para ello, la potencial donante post-mortem debe haber autorizado en vida la donación de sus ovarios. En el documento de consentimiento informado, se debe especificar si los ovocitos que se extraigan de los ovarios, son donados para la investigación o con finalidades reproductivas.

9. Se recomienda autorizar la crioconservación de ovocitos.

Teniendo en cuenta que la ley 35/1988 no autorizaba la congelación de ovocitos mientras no hubiera “suficientes garantías sobre la viabilidad de los óvulos después de su descongelación”, es evidente que la demostración de la efectividad de dicha técnica debe implicar la desaparición de esa prohibición temporal.

10. Conviene incentivar la investigación con ovocitos donados para tal propósito.

En los supuestos previstos en las Conclusiones del Documento sobre Investigación con Embriones del Grupo de Opinión del Observatori de Bioètica i Dret (Signo, 2000) es oportuno incentivar la donación de ovocitos. Por esta razón, el documento de consentimiento informado para la donación de óvulos debería establecer las prioridades de la donante sobre el destino de sus ovocitos, que pueden comprender, además de la donación a una mujer estéril, su uso para la investigación.

RELACIÓN DE MIEMBROS DEL GRUPO DE OPINIÓN
DEL OBSERVATORI DE BIOÈTICA I DRET QUE HAN
ELABORADO ESTE DOCUMENTO

Dra. María Casado. Directora del Observatori de Bioètica i Dret y del Máster de Bioética y Derecho de la Universitat de Barcelona.

Dr. Josep Egozcue. Catedrático de Biología Celular de la Universitat Autònoma de Barcelona. Asesor del Consejo de Europa y de la Comisión Europea.

Dr. Pedro Barri. Jefe del Servicio de Medicina de la Reproducción. Departamento de Obstetricia y Ginecología. Institut Universitari Dexeus de Barcelona.

Dra. Montserrat Boada. Coordinadora del Programa de fecundación in vitro del Servicio de Medicina de la Reproducción. Departamento de Obstetricia y Ginecología. Institut Universitari Dexeus de Barcelona.

Dra. Lúdia Buisan. Médico. Jefe del Servicio de anestesia, reanimación y tratamiento del dolor. Consorci Hospitalari de la Creu Roja de l'Hospitalet.

Dr. Lluís Cabré. Médico. Coordinador de Medicina Intensiva. Hospital de Barcelona.

Dr. Camilo José Cela Conde. Catedrático de Filosofía Moral de la Universitat de les Illes Balears.

Dra. Mirentxu Corcoy. Catedrática de Derecho Penal de la Universidad Pública de Navarra.

Dr. Simón Marina. Médico Director del Institut CEFER.

Dr. Joaquim Martínez Montauti. Médico. Coordinador del Servicio de Medicina Interna del Hospital de Barcelona.

Dra. M. Jesús Montoro. Catedrática de Derecho Administrativo de la Universitat de Barcelona.

Sra. Gloria Páez. Enfermera. Trasplantes: Fundació Bosch Gimpera «Les Heures», Universitat de Barcelona.

Dra. Francesca Puigpelat. Catedrática de Filosofía del Derecho de la Universitat Autònoma de Barcelona.

Dra. Gemma Revuelta. Médico y periodista. Observatori de la Comunicació Científica de la Universitat Pompeu Fabra.

Dra. Encarna Roca. Catedrática de Derecho Civil de la Universitat de Barcelona.

Dra. Coral Rodríguez. Licenciada en Medicina y Diputada del Partido Socialista por Guipúzcoa.

Dr. Albert Royes. Catedrático de Filosofía y Profesor de Ética Médica de la Facultad de Medicina de la Universitat de Barcelona.

Dr. Javier Sádaba. Catedrático de Ética y Filosofía de la Religión de la Universidad Autónoma de Madrid.

Dra. Ana Sánchez Urrutia. Profesora de Derecho Constitucional de la Universitat de Barcelona.

Dr. Josep Santaló. Profesor de Biología de la Reproducción del Departamento de Biología Celular de la Universitat Autònoma de Barcelona.

Dr. Ramon Valls. Catedrático de Historia de la Filosofía y Síndic de Greuges de la Universitat de Barcelona.

Dr. Juan Antonio Vanrell. Catedrático de Ginecología de la Universitat de Barcelona.

Dra. Francesca Vidal. Profesora de Biología de la Reproducción del Departamento de Biología Celular de la Universitat Autònoma de Barcelona.

DOCUMENT SOBRE DONACIÓ D'OÒCITS

Elaborat pel Grup d'Opinió de
l'Observatori de Bioètica i Dret
Parc Científic de Barcelona

Barcelona, abril de 2001

OOBSERVATORI DE BIOÈTICA I DRET

C/ Baldri Reixac, 4-6
Torre D, 4t
08028 - Barcelona
Tel./Fax: 93 403 45 46
e-mail: obd@pcb.ub.es
<http://www.ub.es/fildt/bioetica.htm>
<http://www.bioeticayderecho.ub.es>
<http://www.bioeticayderecho.com>

PRESENTACIÓ

El Grup d'Opinió de l'Observatori de Bioètica i Dret, amb seu al Parc Científic de Barcelona, es va constituir per intentar donar resposta a la necessitat d'analitzar científicament i des d'un punt de vista pluridisciplinari, les implicacions ètiques, socials i jurídiques de les biotecnologies, i per proposar després actuacions concretes.

La creació de l'Observatori de Bioètica i Dret es va dur a terme amb la intenció de participar en el diàleg universitat-societat, i amb la finalitat de fer sentir la seva veu en el conjunt de la societat i, més específicament, davant dels organismes públics, administratius o polítics que regulen i controlen les activitats d'investigació i l'aplicació de les noves tecnologies. Això inclou també la voluntat d'establir relació amb els mitjans de comunicació per millorar la qualitat de la informació.

En aquest cas, el grup ha analitzat les qüestions referents a la donació d'òdits, tema al voltant del qual es requereix un debat social informat, que permeti establir el consens suficient perquè es pugui donar lloc a la corresponent normativa jurídica, concorde amb el sentir social.

En aquest tema, com sol succeir en bioètica, cal una especial disposició per al diàleg pluridisciplinari, que englobi els plantejaments èticofilosòfics, els de l'antropologia cultural, els jurídics i els sociosanitaris, i que es basi en una sòlida base tècnica i científica, aportada per aquelles disciplines les noves possibilitats de les quals desencadenen el debat.

Per això, el grup ha estat coordinat per un metge especialista en reproducció humana, el Dr. Josep Egozcue, i una jurista, la Dra. María Casado, i ha comptat amb l'aportació dels especialistes en andrologia, ginecologia, biologia cel·lular i embriologia, medicina, filosofia, antropologia i dret que es relacionen a l'annex.

PREÀMBUL

D'acord amb dades de la *Sociedad Española de Fertilidad* un 15% de les parelles espanyoles que es troben en edat reproductiva pateixen d'esterilitat. Aproximadament un 40% d'aquestes parelles amb problemes de fertilitat recorreran a un tractament de reproducció assistida i en alguns casos requeriran la donació d'òcits. Aquestes xifres augmenten any rere any. És obvi que en la nostra societat cada cop són més les dones que opten per endarrerir la maternitat, la qual cosa fa més freqüents els problemes d'esterilitat.

Les tècniques per a la reproducció assistida atorguen la possibilitat de ser pares, biològicament, a persones que sense l'ajut d'aquests avenços biotecnològics no haurien tingut descendència. Generalment ha estat un dels primers aspectes regulats quan els Estats han volgut normativitzar problemes de bioètica i noves tecnologies, precisament pel fet que obliguen a considerar des d'un punt de vista nou qüestions que es donaven per resoltes de forma tradicional.

Al nostre país existeixen normes jurídiques directament aplicables, com la llei 35/1988 de tècniques de reproducció assistida; el Reial Decret 412/1996, mitjançant el qual s'estableixen els protocols obligatoris d'estudi dels donants i usuaris relacionats amb les tècniques de reproducció humana assistida i es regula la creació i organització del registre nacional de gàmetes i preembrions amb fins de reproducció humana; el Reial Decret 413/1996, en el qual s'estableixen els requisits tècnics i funcionals precisos per a l'autorització i homologació dels centres i serveis sanitaris relacionats amb les tècniques de reproducció humana assistida; el Reial Decret 415/1997, en el qual es crea la Comissió Nacional de Reproducció Humana Assistida; l'Ordre del Ministeri de Sanitat i Consum de 25 de març de 1996 de normes de funcionament del Registre Nacional de Donants de gàmetes i preembrions i la llei 42/1988, de donació i utilització d'embrions i fetus o de les seves cèl·lules, teixits o òrgans.

La llei de reproducció assistida, pionera en el seu moment a Europa, avui corre perill de quedar obsoleta en alguns dels seus aspectes si no s'adequa als avenços científics produïts durant aquests anys. Tot i que

aquesta regulació pot servir com a punt de partida, el present Document pugna la conveniència de completar-la.

L'opinió de la societat davant la reproducció assistida, és, en l'actualitat, d'acceptació generalitzada. No obstant això, en el rerafons d'aquesta acceptació existeixen concepcions morals i religioses contraposades. És interessant assenyalar que la religió catòlica s'hi mostra, en la seva doctrina, contrària, encara que en la pràctica no fa èmfasi en la seva prohibició, a diferència del que passa amb altres qüestions com ara l'avortament. Altres religions són més favorables a la utilització de les tècniques de reproducció assistida.

Des de plantejaments radicalment diferents, la consideració del respecte als drets de la dona fa que algunes anàlisis feministes siguin poc favorables a l'acceptació d'aquestes tècniques. La creença de que en certs casos les dones estan sotmeses a pressions, de que la informació no és tot l'explícita que fóra necessari pel que fa al caràcter fortament invasiu dels procediments -de donació d'òcits, per exemple-, i la idea de que el consentiment informat no és ni tan informat ni tan lliure en determinats casos, porta a plantejar-se si -al costat d'avantatges indubtables- no existeixen punts foscos que haurien de ser posats de manifest i debatuts més a fons.

Encara que les tècniques de reproducció assistida tenen una bona acceptació social i una àmplia cobertura normativa, sovint es plantegen problemes morals i jurídics d'importància, com és el cas de la donació d'òcits que aquí ens ocupa. Així, existeix un important debat sobre les normes, no només jurídiques sinó també ètiques i deontològiques, que regulen els problemes relacionats amb la selecció de les donants, l'anonimat, la informació que se'ls ha de subministrar, els criteris de selecció, el control del tractament, la compensació que reben o la necessitat de protegir-les durant el procés de donació.

Perquè, encara que de la utilització dels òcits de donants es derivin béns per a les dones o les parelles que recorren a les tècniques de reproducció assistida, això no dispensa de l'obligació, entre d'altres coses, d'establir criteris mèdics clars i homogenis de selecció i d'informar detalladament a les donants dels riscos i responsabilitats que assumeixen amb el seu acte altruista.

Tant l'ètica (que busca la felicitat de les persones, si no es tracta de morals amb el llast de components que no pertanyen al regne dels humans) com el dret (que ha de regular sobre els problemes reals que es plantegen a la societat) han d'ocupar-se d'aquestes qüestions, proposant pautes de conducta assumibles per la majoria dels ciutadans i respectuoses amb les minories, que es materialitzin en el respecte als Drets Humans.

Aquest document pretén precisament aportar informació i punts de vista diferents, tant per participar en el debat públic sobre la qüestió com per proporcionar pautes a l'administració i al legislador amb vista a una possible modificació de la normativa existent al nostre país, mirant de trobar un consens per a les qüestions concretes que tranquil·litzi els ciutadans i, a la vegada, faci funcionar l'ordre científic i industrial.

La societat en la qual vivim és una societat plural, constituïda per individus i col·lectius amb interessos i sensibilitats diversos, potencialment en conflicte, en la qual el ciutadà no constitueix simplement una peça més en la suma de la voluntat comuna, i en la qual precisament la funció de les estructures estatals és conciliar els diferents plantejaments en el marc dels principis establerts per la Constitució, instrumentant les solucions a través de lleis parlamentàries.

Des d'aquí preconitzem un plantejament diferent que busqui pautes de conducta assumibles, prenent sempre com a punt de partida els fets demostrats científicament, i com a marc per a l'establiment del que és o no és acceptable el referent que proporcionen els drets humans. Es tracta, doncs, de seguir una via de caràcter cultural i social que recolza sobre la construcció dels valors morals i culturals, i la seva plasmació en normes.

Precisament, és aquí on el Dret té un paper rellevant com a mitjà de tractar els conflictes i com a sistema per fixar els acords. La societat política ha de ser tolerant amb aquelles opcions que no impliquin un sacrifici desorbitat per a la comunitat. Es tracta d'establir pautes de conducta, no d'atiar la controvèrsia entre plantejaments enfrontats. Aconseguir un compromís en aquestes circumstàncies no és un fracàs, sinó que el més probable és que proporcioni el millor resultat, i el més ètic, sempre que es reconegui la legitimitat dels diferents punts de vista que es mantenen.

Creiem que les normatives que s'estableixin en aquests camps han d'estar imbuïdes de la idea de provisionalitat, ja que el ritme dels descobriments científics i el de la reflexió i normativització són necessàriament diferents. La distància entre la valoració i l'actuació real de la societat i les normes no ha de ser tan gran que converteixi a aquestes en col·leccions de bons desigs. És necessari que el consens normatiu s'estableixi a partir de les dades empíriques, i en el marc de l'establert pels drets reconeguts.

Tota decisió politicojurídica ha de tenir en compte que és una decisió que es pren en unes coordenades d'espai i temps concretes i finites. Si es tracta d'una decisió que vincula amb caràcter general, ha de ponderar l'interès general sobre el particular, i si es tracta, al contrari, d'una decisió que afecta persones concretes, ha de protegir i ponderar els interessos en joc de les parts implicades. En tot cas, qui decideix en dret ha de plantejar-se si la seva resolució afecta drets fonamentals i si pot entrar en pugna amb altres drets, com ara la salut, o amb els interessos dels afectats, o amb principis i valors com ara la dignitat humana. A més a més, convé prendre en consideració el paper que poden desenvolupar els diversos ordres normatius -no només els jurídics, sinó els deontològics i de bona pràctica professional- amb les seves corresponents sancions.

Aquest Grup d'Opinió de l'Observatori de Bioètica i Dret tracta de partir, en les seves propostes, de la llibertat, i establir després les condicions del seu exercici i els límits, si és necessari. I propugna que és possible establir acords respecte al que s'ha de fer en determinades circumstàncies, encara que es difereixi en les raons per a això. Només en la consideració que, des de principis diferents es pot convenir en les mateixes pautes, concretes i revisables, es pot anar avançant en el tractament i la resolució dels problemes bioètics.

DECLARACIÓ

EXPOSICIÓ DE MOTIUS

Considerant que les tècniques de reproducció assistida generen cada cop més una major necessitat de comptar amb donants d'òcits.

Considerant que les tècniques de reproducció assistida estan acceptades socialment, legitimades legalment i, a més a més, formen part de les prestacions sanitàries atorgades pel sistema sanitari públic.

Considerant que en la donació d'òcits es fan servir tècniques que no estan totalment exemptes de riscos.

Considerant que, mentre no es qüestiona la compensació econòmica en la donació de semen, s'ha plantejat que la més elevada quantia de la compensació per la donació d'òcits pot xocar amb el requisit de la gratuïtat establert per la llei.

Considerant que els problemes que generen les noves tecnologies reproductives només poden afrontar-se en el context de la discussió plural, la trobada entre especialistes de diferents disciplines científicosocials i un debat social profund.

Considerant que és necessari contribuir al debat social a fi de crear elements que orientin la política legislativa de l'Estat.

Conscients que els criteris d'actuació en Bioètica han de ser revisats periòdicament, en funció del desenvolupament de la ciència.

El Grup d'Opinió de l'Observatori de Bioètica i Dret ha arribat a les següents

CONCLUSIONS

1. La selecció de la donant idònia ha de conjuguar els criteris mèdics amb el sentir social. Això implica que el tema ha de ser tractat amb la necessària flexibilitat sense acudir a decisions dogmàtiques apriorístiques.

Encara que segons certa opinió social pogués considerar-se més just que els riscos de la donació d'òcits els assumeixin aquelles dones afectades per problemes d'esterilitat que es beneficien de forma significativa de les tècniques de reproducció assistida, des de la perspectiva mèdica, les donants idònies són dones joves (entre els 18 i els 35 anys que marca la llei), sanes i que actuen lliurement; les dones sotmeses a tècniques de reproducció assistida no han de ser donants.

2. La informació que s'ha de proporcionar a la potencial donant d'òcits ha de ser la màxima possible i es determinarà a través de protocols d'informació per escrit sobre el procediment i del document de consentiment informat.

La informació proporcionada ha de contenir la descripció del procediment d'extracció dels òcits i detallar-ne els riscos presents i futurs. És fonamental promoure protocols, consensuats per societats científiques i associacions d'usuaris, a fi que existeixi una unificació de criteris.

3. S'ha de regular l'establiment d'una assegurança obligatòria de responsabilitat objectiva per part del centre que cobreixi els riscos de la donació d'òcits.

Aquest tipus d'assegurança és preceptiva en procediments similars com ara l'hemodonació. Ni la sanitat pública, ni les assegurances privades dels metges han d'assumir els riscos generats per la donació de gàmetes femenins. Cal assenyalar que aquesta reparació no estaria coberta per la compensació ja que aquesta es barema en funció de molèsties, despeses i lucre cessant de les donants i no dels riscos que assumeixen.

4. La donació d'òcits ha de ser anònima.

No obstant això, aquest requisit pot ser dispensat per la llei en circumstàncies excepcionals, que hauria de valorar un organisme competent.

5. Les campanyes de promoció de la donació han de dirigir-se a un públic que pugui valorar correctament els riscos assumits. La publicitat dels programes ha de ser fonamentalment informativa i no competitiva.

La publicitat ha de fer-se d'acord amb pautes comunes, seguint criteris establerts pels codis deontològics i per les societats científiques implicades.

6. La quantia de la compensació ha de seguir criteris homogenis i ha d'estar fixada per l'administració, a proposta de les societats científiques implicades i dels centres de reproducció assistida.

Considerant que la donant d'òcits ha de sotmetre's a un tractament no exempt de riscos i que ha de realitzar nombrosos desplaçaments al centre, es considera que ha d'existir una compensació que ha de ser fixada per l'administració -a partir de la proposta dels centres receptors- seguint criteris homogenis, ja que el mercat no ha de ser el criteri regulador, i que ha de ser revisada periòdicament.

7. Convé insistir en la necessitat de que funcioni de manera efectiva el Registre Nacional de donants de gàmetes que estableix la llei.

Amb la finalitat de preservar la identitat de les parts implicades, els fitxers hauran d'establir-se de manera que la confidencialitat sigui protegida de forma adequada. Per evitar les donants habituals és necessari consultar el registre de donants de gàmetes abans d'acceptar les candidatures.

8. Independentment de les dificultats tècniques que comporta, es recomana fomentar la donació d'òcits post-mortem i que el procediment d'extracció d'òrgans contempli també l'extracció dels ovaris, així com el seu manteniment de la forma científicament més adequada.

En aquest supòsit, la potencial donant post-mortem ha d'haver autoritzat en vida la donació dels seus ovaris. En el document de consentiment

informat s'ha d'especificar si els oòcits que s'extreguin dels ovaris són donats per a la investigació o amb finalitats reproductives.

9. Es recomana autoritzar la crioconservació d'oòcits.

Considerant que la Llei 35/1988 no autoritzava la congelació d'oòcits mentre no hi hagués «garanties suficients sobre la viabilitat dels òvuls després de la seva descongelació», és evident que la demostració de l'efectivitat de l'esmentada tècnica ha d'implicar la desaparició d'aquesta prohibició temporal.

10. Convé incentivar la investigació amb oòcits donats per a tal propòsit.

En els supòsits previstos en les Conclusions del *Document sobre Investigació amb Embrions* del Grup d'Opinió de l'Observatori de Bioètica i Dret (Signo, 2000) es defensava que és oportú incentivar la donació d'oòcits. Per aquesta raó, el document de consentiment informat per a la donació d'òvuls hauria d'establir les prioritats de la donant sobre el destí dels seus oòcits, que pot incloure, a més a més de la donació a una dona estèril, el seu ús per a la investigació.

RELACIÓ DE MEMBRES DEL GRUP D'OPINIÓ
DE L'OBSERVATORI DE BIOÈTICA I DRET QUE HAN
ELABORAT AQUEST DOCUMENT

Dra. María Casado. Directora de l'Observatori de Bioètica i Dret i del Màster de Bioètica i Dret de la Universitat de Barcelona.

Dr. Josep Egozcue. Catedràtic de Biologia Cel·lular de la Universitat Autònoma de Barcelona. Assessor del Consell d'Europa i de la Comissió Europea.

Dr. Pedro Barri. Cap del Servei de Medicina de la Reproducció. Departament d'Obstetrícia i Ginecologia. Institut Universitari Dexeus de Barcelona.

Dra. Montserrat Boada. Coordinadora del Programa de fecundació in vitro del Servei de Medicina de la Reproducció. Departament d'Obstetrícia i Ginecologia. Institut Universitari Dexeus de Barcelona.

Dra. Lúdia Buisan. Metgessa. Cap del servei d'anestesia, reanimació i tractament del dolor. Consorci Hospitalari de la Creu Roja de l'Hospitalet.

Dr. Lluís Cabré. Metge. Coordinador de Medicina Intensiva. Hospital de Barcelona.

Dr. Camilo Cela José Conde. Catedràtic de Filosofia Moral de la Universitat de les Illes Balears.

Dra. Mirentxu Corcoy. Catedràtica de Dret Penal de la Universitat Pública de Navarra.

Dr. Simón Marina. Metge. Director de l'Institut CEFER.

Dr. Joaquim Martínez Montauti. Metge. Coordinador del Servei de Medicina Interna de l'Hospital de Barcelona.

Dra. M. Jesús Montoro. Catedràtica de Dret Administratiu de la Universitat de Barcelona.

Sra. Glòria Páez. Infermera. Transplantaments: Fundació Bosch Gimpera «Les Heures», Universitat de Barcelona.

Dra. Francesca Puigpelat. Catedràtica de Filosofia del Dret de la Universitat Autònoma de Barcelona.

Dra. Gemma Revuelta. Metgessa i periodista. Observatori de la Comunicació Científica de la Universitat Pompeu Fabra

Dra. Encarna Roca. Catedràtica de Dret Civil de la Universitat de Barcelona.

Dra. Coral Rodríguez. Llicenciada en Medicina i Diputada del Partit Socialista per Guipúscoa.

Dr. Albert Royes. Catedràtic de Filosofia i Professor d'Ètica Mèdica de la Facultat de Medicina de la Universitat de Barcelona.

Dr. Javier Sádaba. Catedràtic d'Ètica i Filosofia de la Religió de la Universidad Autónoma de Madrid.

Dra. Ana Sánchez Urrutia. Professora de Dret Constitucional de la Universitat de Barcelona.

Dr. Josep Santaló. Professor de Biologia de la Reproducció del Departament de Biologia Cel·lular de la Universitat Autònoma de Barcelona.

Dr. Ramon Valls. Catedràtic d'Història de la Filosofia i Síndic de Greuges de la Universitat de Barcelona.

Dr. Juan Antonio Vanrell. Catedràtic de Ginecologia de la Universitat de Barcelona.

Dra. Francesca Vidal. Professora de Biologia de la Reproducció del Departament de Biologia Cel·lular de la Universitat Autònoma de Barcelona.

DOCUMENT ON OOCYTE DONATION

Prepared by the Opinion Group
of Bioethics and Law Observatory

Barcelona, april 2001

OBSERVATORI DE BIOÈTICA I DRET

C/ Baldiri Reixac, 4-6
Torre D, 4t
08028 - Barcelona
Tel./Fax: 93 403 45 46
e-mail: obd@pcb.ub.es
<http://www.ub.es/fildt/bioetica.htm>
<http://www.bioeticayderecho.ub.es>
<http://www.bioeticayderecho.com>

INTRODUCTION

The Opinion Group Bioethics and Law Observatory, based at the Barcelona Science Park, was formed to study the ethical, social and legal implications of new biotechnology techniques from a scientific and multidisciplinary point of view, and to make specific proposals for actions to be taken.

The Bioethics and Law Observatory itself was created with a view to participating in the university-society dialogue and making its voice heard in the wider society; more specifically its aim was to make submissions to the public, administrative and political bodies which regulate and control research and application of new technologies. Achieving these aims also demands a fluid relationship with the media, so as to improve the quality of information available.

On this occasion, the group has studied the issue of oocyte donation, an area which requires informed social debate if we are to establish sufficient consensus for the enactment of legislation which will accurately reflect the wishes of society.

As tends to occur in Bioethics, there is a great need for multidisciplinary dialogue encompassing the ethical, philosophical, anthropological, legal, social and health aspects of the issue of oocyte donation. In addition, the debate needs to be solidly based on technical and scientific input from the disciplines whose advances underlie the issue at hand.

Therefore, the group has been coordinated by a medical specialist in human reproduction, Dr. Josep Egozcue, and by a jurist, Dr. María Casado, and has received submissions from specialists in andrology, gynaecology, cell biology and embryology, medicine, philosophy, anthropology and law, as acknowledged in the annex.

PREAMBLE

According to data provided by the Spanish Fertility Society, 15% of Spanish couples of reproductive age suffer from sterility, and approximately 40% of these couples will seek to avail of assisted reproduction techniques which, in some cases will require donation of oocytes. These figures increase every year, because there are in our society increasingly large numbers of women who delay motherhood, and this leads to a greater frequency of sterility problems.

Assisted reproduction techniques enable couples to have their own biological children, which otherwise would not have been born. The problems deriving from use of these techniques have been the first to be regulated by the governments of various States when attempting to legislate on issues of Bioethics and new technologies. There is already a body of directly applicable legislation in our country: Law 35/1988, on assisted human reproduction techniques; Royal Decree 412/1996, which establishes the obligatory protocols for the study of donors and recipients in assisted human reproduction and which regulates the creation and organisation of the National Register of Gametes and Pre-Embryos for use in human reproduction; Royal Decree 413/1996, establishing the technical and functional requirements for authorisation and recognition of health centres and services involved in assisted human reproduction; Royal Decree 415/1997, establishing the creation of the National Commission for Assisted Human Reproduction; Order of the Ministry for Health and Consumption of 25 March, 1996 on functional regulations of the National Register of Gamete and Pre-embryo Donors, and Law 42/1988, on donation and use of embryos and fetuses, or their cells, tissues or organs.

The Law of Assisted Reproduction was, in its day, a pioneer in Europe; today, however it is in danger of becoming obsolete in several respects if steps are not taken to adapt it to the scientific advances made in recent years. In this light, and accepting that this Law is undoubtedly a sound starting point, we propose that it be revised and supplemented.

There is widespread acceptance of assisted reproduction in our society. Nevertheless, the techniques employed also question many moral and religious assumptions. It is interesting to note that Catholic Church

doctrine is against these techniques, yet in practice the Church does not place great emphasis on having them banned, unlike in the case of abortion, for example. Other religions have a more favourable attitude to assisted reproduction.

From a radically different perspective, certain feminist analyses also take a negative view of assisted reproduction on the basis of the rights of the woman. The view that in certain cases the woman is subject to pressure, that the information is less explicit than it should be, given the invasive nature of the procedures (oocyte donation, in this case) and the idea that informed consent is neither as well-informed nor as free as it should be, leads to question whether there might not be areas that would benefit from wider examination and debate, even though the undoubted advantages of assisted reproduction are generally accepted.

Although the use of assisted reproduction techniques is socially accepted and adequately covered by legislation, it can, nevertheless pose serious moral and legal problems; and this occurs in the case of oocyte donation. In consequence, a debate has arisen concerning the rules - not only legal rules but also ethical and deontological ones - which must regulate such issues as donor selection, anonymity, information provided to donors, selection criteria, treatment control, compensation received, and the need to protect the donors during the donation process.

For, although the use of the oocytes provided by the donor leads to benefits for the women or couples availing of assisted reproduction techniques, this does not free the centres from the obligation to establish clear and homogeneous medical criteria for donor selection and to provide them with detailed information concerning the risks and responsibilities entailed in their altruistic act.

Both Ethics (which seeks human happiness, except when moral issues are burdened by components which do not belong to the realm of humans) and Law (which seeks to regulate for the real problems facing society) must concern themselves with these issues, and propose behavioural guidelines which are acceptable to the majority and yet respectful of minorities, through scrupulous observance of their Human Rights

In this present Document we aim to provide information and different points of view, both for the purpose of participating in the public debate and to offer guidelines to the government and legislator for possible future modification of the existing law in Spain. We also seek to reach consensus on specific issues so as to reassure society and, at the same time, allow science and industry to advance.

The society in which we live is a plural one, made up of individuals and groups with their own interests and varied sensitivities, all potentially in conflict, and in which the individual is not a mere cog in the machine of common will. In such a society the function of the state's structures is to reconcile the various views in accordance with the principles established by the Constitution, through the enactment of parliamentary laws.

We argue that we must seek practical guidelines for action, guidelines that are acceptable and based on scientifically demonstrated fact, and we must determine what is and what is not acceptable by reference to Human Rights. We must undertake educational and social action, based on the construction of moral and cultural values, and then transfer this to legislation. And it is precisely here that the Law has a role to play as a means of conflict resolution and as a system for establishing consensus.

The political society must be tolerant of those options which do not demand an extreme sacrifice on the part of the community as a whole. It is better to lay down behavioural guidelines rather than dig our heels into the ruts of opposing viewpoints. Achieving compromise in these circumstances is not a sign of failure, rather it is in all likelihood the only way of achieving the best and most ethical result, on condition that the diverging points of view are all accorded equal legitimacy.

We believe that the rules established in these fields must be advanced in a spirit of provisionality, since the pace of scientific discovery and that of corresponding legislation are by nature different. The distance separating the real values and behaviour of society and its laws must not be so great as to convert the latter in nothing more than a collection of good intentions. Legislating consensus must be established on the basis of empirical data and in accordance with recognised rights.

It must be borne in mind that these politico-legal decisions will be taken in concrete and finite conditions of space and time. Should the decision have general implications, then the general interest must prevail over the individual, and if, on the contrary it is a decision which affects specific individuals, it is their interests that must prevail and be the object of protection. In any case, legislative decision makers must consider whether a ruling which affects fundamental rights enters into conflict with other rights, such as the health, or wellbeing of the involved parties, or with accepted principles and values. It must also be remembered that various types of regulation enter into play at this stage - not only legal regulations but also deontological considerations and the rules of correct professional practice - each with its corresponding penalties.

In its proposals, the Opinion Group of the *Observatori de Bioètica i Dret* sets out from the basis of freedom, and aims to establish the conditions for application of these proposals, and their limitations, if necessary. We hold that it is possible to reach consensus on what should be done in given circumstances, although the reasons underlying this agreement may be different. Only if we accept that agreement on a set of actions is possible despite the existence of divergent principles, can we advance in dealing with and solving the problems emerging in Bioethics.

DECLARATION

REASONS FOR THE DECLARATION

Given that the prevalence of sterility demands an ever-increasing number of oocyte donors.

Given that assisted reproduction techniques are socially accepted, legally authorised and, furthermore, included within the services offered by the public health service.

Given that the techniques employed to enable donation of oocytes are not entirely free of risk.

Given that payment for sperm donation has never been the source of controversy, but that the higher quantities paid for oocyte donation may be seen to be in conflict with the non-payment requirement established by law.

Given that the problems generated by the new reproduction technologies can only be faced in the context of plural discussion, a coming together of specialists in a range of socio-scientific disciplines and comprehensive social debate.

Given that it is necessary to make a contribution to this debate and provide guidance to the state's legislators.

And in awareness that the criteria for action in Bioethics must be subject to regular revision, in keeping with scientific advances,

The Opinion Group of the Observatori de Bioètica i Dret has reached the following

CONCLUSIONS

1. The selection of donors must be in keeping with medical criteria and the views of society with regard to what is acceptable. This requires that the issue be treated with the necessary flexibility and that a priori dogmatic decisions be avoided.

Although it would appear fitting that the risks involved in donation of oocytes should lie with those women suffering from sterility problems who stand to benefit most from assisted reproduction techniques, in reality, from the medical point of view, the ideal donors are healthy, young women - between 18 and 35 years of age, as set out by the law - who are acting of their own accord. Women availing of assisted reproduction techniques cannot themselves be donors.

2. The information given to the potential oocyte donor must be as complete as possible and will be determined by the protocols for written information and the informed consent document.

The information given must include description of the process for extraction of the oocytes and details of present and future risks. Homogeneous protocols are of fundamental importance and must be the outcome of consensus between scientific societies and users associations.

3. Compulsory insurance must be established, by part of the center, to cover the risks of oocyte donation.

Such insurance is mandatory in similar procedures such as hemodonation. Neither the public health system nor doctors' private insurance policies can accept the risks attached to donation of female gametes. The compensation could not be seen as covering this either, since it is intended to compensate for inconvenience, expenses and lost income on the part of the donors, but not the risk incurred.

4. Oocyte donors should remain anonymous.

However, this requirement may be waived by the law under exceptional circumstances, subject to authorisation from the competent authority.

5. Campaigns to promote oocyte donation must be addressed to a public which is capable of accurately assessing the risks involved. Programme publicity should be essentially informative as opposed to competitive in nature.

All publicity must be in accordance with common guidelines; and should follow criteria established by deontological codes and the relevant scientific societies.

6. The amount of compensation paid to donors must follow homogeneous criteria established by the government on the recommendation of the relevant scientific societies and assisted reproduction centres.

Bearing in mind that the oocyte donor must receive treatment which is not free of risk and must travel on numerous occasions to the assisted reproduction centre, we feel it is just that there be compensation. The amount of this compensation should be established by the government - on the basis of recommendations from the receiving centre - in accordance with standard criteria, since market forces must not be the determining factor. The compensation must be revised periodically.

7. It is essential that the National Register of Gamete Donors established by the law function effectively.

Entries should be maintained in such a way as to ensure confidentiality and the anonymity of the involved parties. To avoid the emergence of «habitual donors», the Register of Gamete Donors must be consulted before candidates are accepted.

8. Independently of the technical difficulties involved, it is recommended that post-mortem donation of oocytes be fostered and that organ extraction procedures also contemplate ovary extraction, in addition to their maintenance in the most scientifically appropriate manner.

For this purpose, potential post-mortem donors must authorise donation of their ovaries before death. The informed consent document must specify whether oocytes extracted from the ovary are to be used for research or reproductive purposes.

9. It is recommended that cryopreservation of oocytes be authorised.

Bearing in mind that Law 35/1988 did not permit cryopreservation of oocytes until such time as there was «sufficient guarantee that the ovules will be viable after freezing» and that now the technique has been shown to be effective, this prohibition on cryopreservation should be lifted.

10. Research using oocytes donated for the purpose of research should be encouraged.

Within the circumstances foreseen in the conclusions presented in the Group's Declaration on Embryo Research, (Signo, 2000), oocyte donation is to be encouraged. The informed consent document for oocyte donation should establish the donor's priorities with regard to the eventual destination of her oocytes, which may entail, in addition to donation to a sterile woman, their use for research purposes.

MEMBERS OF THE OPINION GROUP OF THE
OBSERVATORI DE BIOÈTICA I DRET WHO HAVE
DRAWN UP THIS DOCUMENT

Dra. María Casado. Directora del Observatori de Bioètica i Dret y del Máster de Bioética y Derecho de la Universitat de Barcelona.

Dr. Josep Egozcue. Catedrático de Biología Celular de la Universitat Autònoma de Barcelona. Asesor del Consejo de Europa y de la Comisión Europea.

Dr. Pedro Barri. Jefe del Servicio de Medicina de la Reproducción. Departamento de Obstetricia y Ginecología. Institut Universitari Dexeus de Barcelona.

Dra. Montserrat Boada. Coordinadora del Programa de fecundación in vitro del Servicio de Medicina de la Reproducción. Departamento de Obstetricia y Ginecología. Institut Universitari Dexeus de Barcelona.

Dra. Lúdia Buisan. Médico Jefe del Servicio de anestesia, reanimación y tratamiento del dolor. Consorci Hospitalari de la Creu Roja de l'Hospitalet.

Dr. Lluís Cabré. Médico. Coordinador de Medicina Intensiva. Hospital de Barcelona.

Dr. Camilo José Cela Conde. Catedrático de Filosofía Moral de la Universitat de les Illes Balears.

Dra. Mirentxu Corcoy. Catedrática de Derecho Penal de la Universidad Pública de Navarra.

Dr. Simón Marina. Médico. Director del Institut CEFER.

Dr. Joaquim Martínez Montauti. Médico. Coordinador del Servicio de Medicina Interna del Hospital de Barcelona.

Dra. M. Jesús Montoro. Catedrática de Derecho Administrativo de la Universitat de Barcelona.

Sra. Gloria Páez. Enfermera. Trasplantes: Fundació Bosch Gimpera «Les Heures», Universitat de Barcelona.

Dra. Francesca Puigpelat. Catedrática de Filosofía del Derecho de la Universitat Autònoma de Barcelona.

Dra. Gemma Revuelta. Médico y periodista. Observatori de la Comunicació Científica de la Universitat Pompeu Fabra.

Dra. Encarna Roca. Catedrática de Derecho Civil de la Universitat de Barcelona.

Dra. Coral Rodríguez. Licenciada en Medicina y Diputada del Partido Socialista por Guipúzcoa.

Dr. Albert Royes. Catedrático de Filosofía y Profesor de Ética Médica de la Facultad de Medicina de la Universitat de Barcelona.

Dr. Javier Sádaba. Catedrático de Ética y Filosofía de la Religión de la Universidad Autónoma de Madrid.

Dra. Ana Sánchez Urrutia. Profesora de Derecho Constitucional de la Universitat de Barcelona.

Dr. Josep Santaló. Profesor de Biología de la Reproducción del Departamento de Biología Celular de la Universitat Autònoma de Barcelona.

Dr. Ramon Valls. Catedrático de Historia de la Filosofía y Síndic de Greuges de la Universitat de Barcelona.

Dr. Juan Antonio Vanrell. Catedrático de Ginecología de la Universitat de Barcelona.

Dra. Francesca Vidal. Profesora de Biología de la Reproducción del Departamento de Biología Celular de la Universitat Autònoma de Barcelona.

FUNDACIÓ
M^a Francisca de
ROVIRALTA

Observatori de
Bioètica i Dret



Parc Científic
de Barcelona